



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, diez de noviembre de dos mil veintitrés

22-334

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **GUILLERMO LEON PINEDA SALAS.**
Demandados: **JORGE ALBERTO ARCILA QUICENO y COLPENSIONES E.I.C.E.**
Radicado No.: 05001-31-05-021-2020-00358-01
Tema: relación laboral.
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 38** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1.LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que se declare la existencia de una relación laboral, y consecuentemente se condene a Colpensiones a efectuar el cálculo actuarial correspondiente a cargo del señor Jorge Alberto Arcila Quiceno. Que se ordene a Colpensiones revocar la resolución SUB 129366 de 2018 por medio de la cual se reconoció la indemnización sustitutiva, y en su lugar, se condene a dicha entidad a reconocer y pagar la pensión de vejez de conformidad con lo estatuido en el Decreto 758 de 1990, el retroactivo pensional, los intereses moratorios o la indexación de las condenas. Que se ordene a Colpensiones el reintegro de los dineros girados al

actor por concepto de BEPS. Finalmente, solicitó se condene a Colpensiones al pago de gastos del proceso y agencias en derecho.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS HECHOS:

- Que nació el 14 de febrero de 1950, por lo que al momento de presentación de la demanda contaba con 70 años de edad y por ende era beneficiario del régimen de transición.
- Que cotizó al ISS hoy Colpensiones un total de 1.011 semanas.
- Que laboró a órdenes del demandado mediante un contrato de trabajo verbal, desde el 3 de noviembre de 1999, hasta el 28 de febrero de 2001, tiempo durante el cual se omitió los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, correspondientes a 68.28 semanas de cotización, las cuales serían suficientes para causar el derecho a la pensión de vejez.
- Que el 10 de marzo de 2015, solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, entidad que mediante resolución GNR 268122 de 2015 negó tal pretensión argumentando que no era beneficiario del régimen de transición y que no contaba con la densidad de semanas cotizadas exigidas por la Ley.
- Que Colpensiones reconoció indemnización sustitutiva mediante resolución SUB 129366 del 16 de mayo de 2018 por un valor de 4.485.666, valor que fue trasladado al programa de BEPS.
- Que el 30 de octubre de 2019, solicitó ante Colpensiones la aceptación de: la renuncia a la indemnización sustitutiva, del retiro del programa de BEPS y del pago de los aportes omitidos.
- Que Colpensiones mediante comunicado del 11 de diciembre de 2019, negó la pretensión aduciendo que la indemnización sustitutiva tiene un carácter irrevocable, frente al pago de los aportes, aclaró que el cálculo actuarial debe solicitarse en un punto de atención de la entidad.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El señor Jorge Alberto Arcila Quiceno, no se opuso a las pretensiones de la demanda siempre que su procedencia la determine el fallador de conocimiento conforme a las pruebas aportadas al proceso. Frente a los hechos, aceptó los relativos a la fecha de nacimiento del demandante, la existencia del contrato de trabajo, los extremos temporales, y su voluntad pagar el cálculo actuarial, frente a los demás adujo que no le constan, ateniéndose a lo probado en el proceso.

Colpensiones E.I.C.E. se opuso a las pretensiones de la demanda; y frente a los hechos estimó como ciertos los relacionados con la fecha de nacimiento del actor y las solicitudes incoadas con sus respuestas. Frente a los demás supuestos facticos, indicó que no le constaban por no existir

pruebas que así lo acrediten, lo anterior, de conformidad con los artículos 1757 del Código Civil y 167 del CGP.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín dispuso lo siguiente:

- “1) Absolver a COLPENSIONES y a JORGE ALBERTO ARCILA QUICENO de las pretensiones del demandante GUILLERMO LEÓN PINEDA SALAS.*
- 2) Declarar la probada la excepción de no acreditación de los elementos esenciales del contrato de trabajo.*
- 3) No se condena en costas al demandante.*
- 4) Se ordenará el grado de CONSULTA en favor del demandante en caso de no apelación.”*

Dentro del término establecido por la Ley, la parte demandante sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ.

Señaló que el demandante no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía para demostrar la existencia de una relación laboral con el demandado, destacó que no existen pruebas en el plenario de las que pueda desprenderse la prestación personal del servicio, y que la parte actora no aportó documentos o testimonios que cimienten los argumentos expuestos en la demanda, aclaró que el simple allanamiento del demandado no otorga certeza de la existencia del vínculo laboral.

Respecto a la solicitud de revocatoria de la resolución que otorgó la indemnización sustitutiva, adujo que no es procedente por cuanto dicho reconocimiento tiene carácter irrevocable, aunado a que dicha pretensión implicaría modificar el debate probatorio pues incumbe la vinculación de terceros como la Nación al ser garante de los BEPS, y de la aseguradora al ser quien garantiza el funcionamiento de dicho programa, lo anterior en aras de proteger el debido proceso.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL DEMANDANTE.

Solicitó la revocatoria de la sentencia, considerando que el allanamiento presentado en la contestación de la demanda constituye prueba suficiente para que proceda la declaratoria de la relación laboral, considerando que existe confesión por parte del demandado, punto que

Colpensiones podrá desestimar ante la jurisdicción penal si así lo considera. Resaltó que, desde el punto de vista procesal y probatorio, la prueba recaudada es suficiente para declarar la existencia de la relación laboral.

En cuanto a la solicitud de revocatoria de la resolución que otorgó la indemnización sustitutiva, adujo que Colpensiones tiene la facultad de dejar sin efectos dicha resolución al ser la entidad que la emitió.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Vencido el término establecido para ejecutar esta etapa procesal, ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Se circunscribe a determinar si los elementos probatorios obrantes en el plenario resultan suficientes para declarar la existencia de una relación laboral entre el demandante y el señor JORGE ALBERTO ARCILA QUICENO, analizando lo relativo a las cargas probatorias que en tal sentido son atribuibles a las partes. En caso afirmativo, se examinará la viabilidad de la revocatoria de la Resolución SUB 129366 del 16 de mayo de 2018, la inclusión de las semanas en mora y el reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme a los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misa anualidad.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

En primer lugar, alega el demandante que laboró al servicio del señor JORGE ALBERTO ARCILA QUICENO mediante un contrato a término indefinido, el cual se desarrolló durante el interregno comprendido entre el 3 de noviembre de 1999, y el 28 de febrero de 2001, sin establecer el salario recibido, ni las funciones que requería desempeñar con ocasión al contrato de trabajo.

La parte demandada no se opuso a las pretensiones incoadas por el actor, y condicionó su declaratoria a la determinación que con base en el soporte probatorio tome el juez de autos.

Conforme al margen jurídico que envuelve el asunto que nos ocupa, es dable traer a colación el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo que regula lo atinente al contrato de trabajo y los elementos esenciales del mismo, en los siguientes términos:

“ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

De la norma anterior se colige que, la existencia de un contrato de trabajo se puede configurar ante la confluencia de los tres elementos referidos, esto es la prestación personal del servicio, subordinación y salario, cuyo elemento base es el segundo de los aludidos, que se refiere a la facultad subordinante y sancionatoria del empleador sobre el trabajador, representada en la imposición de reglamentos, órdenes, vigilancia, control de la actividad prestada en forma permanente, sin que se vea desnaturalizada la condición del contrato en razón de la denominación que se le dé a la remuneración, la forma de ejercer la labor, y el lugar o tiempo que se disponga para ello.

Por su parte, el artículo 24 ibídem establece:

“ARTICULO 24. PRESUNCION.

Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”

Para desencadenar los efectos de esta presunción, es menester que quien alega la existencia del contrato pruebe al menos la prestación personal del servicio y la remuneración recibida, y de ese modo se encuentra en una situación de ventaja frente al presunto empleador, quien en todo caso tiene la posibilidad de desvirtuar tal presunción, demostrando que la relación no fue subordinada, sino que, por el contrario, fue autónoma e independiente o que se rigió mediante un contrato de otra naturaleza jurídica.

En consonancia con lo anterior, sobre los elementos que se deben analizar para efectos de verificar la existencia de un vínculo laboral, nuestro órgano de cierre en providencia con radicación

36.549 expuso que para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal este demostrada la actividad personal del trabajador a favor del demandado, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral, señaló que no es menester su acreditación con la producción de la prueba apta, cuando se encuentra evidenciada esa prestación personal del servicio, dado que en este evento lo pertinente es hacer uso de la presunción legal prevista en el art. 24 del CST.

Valga aclarar en este punto que, si bien la normatividad ha consagrado una presunción legal de que toda prestación personal de un servicio está regida por un contrato de trabajo, ello no releva a quien alega su existencia de la obligación de acreditar que tal servicio se desarrolló, no sólo de manera personal, sino además continuada, dependiente y remunerada; los extremos temporales y los parámetros bajo los cuales se desarrolló, pues la prosperidad de lo pretendido depende de ello. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del CGP, el cual establece:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA.

Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.”

Se insiste entonces en la necesidad de acreditar las particularidades del contrato, pues son elementos comunes a la modalidad que cada parte defiende la prestación de un servicio y su contraprestación.

En el caso de autos, llama la atención de la Sala que la parte actora no aportó ninguna prueba que detente la prestación personal del servicio, por el contrario, la relación laboral argüida solamente se cimenta en el allanamiento realizado por el demandado en el escrito de contestación a la demanda, punto que a juicio del actor, es suficiente para declarar el vínculo contractual, sin embargo, se percata esta Magistratura de que ni siquiera teniendo en cuenta dicho escrito se pudo llegar a la conclusión que el demandante expone en su recurso de alzada, pues al contestar la demanda, el

accionado de forma expresa condiciona la procedencia de las pretensiones incoadas a la determinación que haga el fallador conforme al material probatorio aportado al plenario, mismo que se torna inexistente. De acuerdo a lo anterior, cabe recordar que el operador jurídico debe apreciar las pruebas de acuerdo con las circunstancias de cada caso, aplicando las reglas de la sana crítica, en una clara expresión de la libre formación del convencimiento, tal y como lo señalan los Art. 60 y 61 del C. de P. Laboral y de la Seguridad Social.

Bajo este hilo argumentativo, es pertinente colegir que no quedó establecido que efectivamente el señor GUILLERMO LEON PINEDA SALAS hubiera prestado sus servicios de manera personal para el demandado, ni qué labor desarrollaba y si lo era en cumplimiento de las ordenes que en tal sentido le fueran impuestas por quien dice era su empleador, tampoco se estableció el salario que recibía este a cambio de los servicios prestados o si se imponía horario, ni si se impartían instrucciones o si acarreaba consecuencias adversas la inejecución de determinada actividad, para poder determinar si se configuraba el elemento de la subordinación, el cual es clave para establecer si se trataba de una verdadera relación laboral. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en providencia SL 2295 de 2022 expuso:

“Sea lo primero recordar que tal y como lo ha reiterado esta Sala, para la configuración del contrato de trabajo se requiere que esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor del demandado, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica –que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral-, no es menester su acreditación cuando la primera se hace manifiesta, pues en tal evento, lo pertinente es hacer uso de la prerrogativa legal prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo modificado por el artículo 2.º de la Ley 50 de 1990, según el cual «se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo».

De acuerdo con lo anterior, al actor le basta con probar en el curso de la litis su actividad personal, para que se presuma en su favor el vínculo laboral, y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción, evidenciando que la relación fue independiente y no subordinada.”

Aunado a lo anterior, tampoco pudo establecerse los extremos temporales en que se desarrolló la supuesta relación laboral, pues si bien el demandante afirma que laboró entre el 3 de noviembre de 1999 y el 28 de febrero de 2001, ningún elemento probatorio solventa esos dichos.

Frente al tema se ha pronunciado en múltiples ocasiones la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas en la sentencia de radicación 45.051 del 16 de noviembre de 2016, evento en el cual precisamente la exculpación de las condenas efectuada por el Juez

colegiado estuvo fundada únicamente en la insuficiencia probatoria de los extremos laborales. Al respecto precisó que:

“Pero además, el sentenciador de segunda instancia no incurre en los vicios ostensibles de hecho atribuidos, por la omisión de apreciación de la contestación de la demanda e interrogatorio de parte de la representante legal de la entidad empleadora, dado que aquella pieza procesal y la prueba calificada no contienen confesiones del extremo inicial y final de la relación laboral; aspectos de la relación laboral que no se presumen y constituye obligación procesal de la parte demandante demostrarlos, so pena de asumir las consecuencias jurídicas, como en el presente caso. Así lo tiene adocinado la Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL, del 5 de agos. 2009, rad. 36549.”

Así mismo, en sentencia con radicado 45707 del 19 de julio de 2017 indicó la Corte:

“(…)De otro lado, la parte actora, a quien le incumbía acreditar los supuestos fácticos aducidos, no trajo al debate procesal testigos que respaldaran sus afirmaciones, en especial, que dieran cuenta sobre las fechas de ingreso y retiro.

En esas condiciones, de ningún elemento de prueba surgen los extremos temporales del contrato de trabajo, esto es, no se demostró el lapso en el que desarrolló sus funciones, carga de la prueba que le correspondía al actor y que no cumplió, sin la cual no es viable en sede de instancia, analizar la procedencia de las súplicas reclamadas.

Tal y como lo tiene adocinado la Corporación, los extremos inicial y final de la relación laboral no se presumen y, por ende, constituye obligación procesal de la parte demandante demostrarlos, so pena de asumir las consecuencias adversas, tal y como ocurre en el presente caso (CSJ SL 36549, 5 de ag. 2009, reiterada en SL17135-2016).”

En conclusión, estima la Sala que en el proceso de marras no existen las bases probatorias suficientes para declarar la relación argüida por el actor, así como sus pretensiones consecuenciales, pues conforme al fundamento jurídico expuesto, la carga de la prueba recaía en el demandante, quien estaba en la obligación de demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, en ausencia de documentación contractual, testigos o cualquier otro medio probatorio que respalde sus aserciones, la pretensión de la existencia del contrato de trabajo carece de sustento y no puede ser considerada como un hecho probado, y dado que esta declaración habilita el estudio de las demás pretensiones incoadas, no es necesario desplegar un análisis específico en torno a estas, debiéndose **CONFIRMAR** la providencia de primera instancia por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema.

Costas en esta instancia a cargo del demandante por no haber tenido éxito en el recurso de alzada. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$100.000 para cada demandado.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE:**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido el señor **GUILLERMO LEÓN PINEDA SALAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 8.306.880 contra **JORGE ALBERTO ARCILA QUINCENO y COLPENSIONES E.I.C.E.**, conforme lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante por no haber tenido éxito en el recurso de apelación. Se fijan agencias en derecho en la suma de \$100.000 para cada una de las partes accionadas.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **GUILLERMO LEON PINEDA SALAS.**
Demandados: **JORGE ALBERTO ARCILA QUICENO y COLPENSIONES E.I.C.E.**
Radicado No.: 05001-31-05-021-2020-00358-01
Tema: relación laboral.
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**
Fecha de la sentencia: **10/11/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 14/11/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario